CASO DE ADÁN YEMAYÁ Y OTROS VS LA REPÚBLICA DE ATLANTA

**República de la Atlanta-Representantes de las Presuntas Víctimas-Comisión
Interamericana de Derechos Humanos**

**Escrito de Contestación del Informe de la CIDH y del ESAP de las Presuntas Víctimas-
Presentado ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos**

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

INDICE

I. Portada.....	1
II. Índice.....	2
III. Exposición de los hechos del caso.....	3-6
IV. Objeto y apersonamiento.....	7
V. Competencia y admisibilidad.....	7
VI. Excepción preliminar.....	8-9
VII. Análisis del fondo del caso.....	10-27
No violación de los artículos 4, 5, 11 y 19 de la CADH en relación con su artículo 11	
No violación de los artículos 17, 19 y 21 en conexidad con el artículo 1.1 de la CADH	
No violación de los artículos 13.1, 16 y 23 de la CADH en conexidad con su artículo 1.1	
No violación de los artículos 8 y 25 de la CADH en conexidad con su artículo 1.1	
VIII. Petitorio.....	28
IX. Bibliografía.....	29-32

HECHOS DEL CASO

I. Contexto

1. La República de Atlanta es una isla ubicada en el océano atlántico, gracias a algunos estados extranjeros y a la ONU, se inició un proceso de paz en 1991.
2. El proceso de paz tuvo serias dificultades. Como resultado del cese al fuego durante las negociaciones de paz suscrita el 5 de mayo de 1991,
3. El 1 de agosto de 1992 se firmó un acuerdo final de paz que tuvo como resultado la desmovilización, desarme y reintegración del ELA.
4. el estado en 1995 ratificó múltiples tratados en derecho humanos del sistema universal y regional americano en 1995 y en 1996 aceptó la competencia de la corte
5. Hacia el año 2002, se inició un nuevo proceso de paz el 19 de febrero de 2003. El gobierno se comprometió a crear una comisión de verdad amplia para todos los hechos de violencia del pasado e impulsar un programa de reparaciones administrativas para los hechos perpetrados por las FACIRA y el EAA. Además se ratificó el Estatuto de la Corte Penal Internacional, las negociaciones de paz durante el año 2003 se desarrollaron con muchos altibajos.
6. El 31 de enero de 2004, un grupo de cerca de 80 miembros del EAA ingresaron al caserío Milpiés. Ante esta situación un grupo de mineros, empezaron a correr y gritar, lo que ocasionó que éstos empezaran a disparar ocasionando la muerte y heridas de un número indeterminado de personas.
7. Inmediatamente se improvisaron ayudas de socorro para atender a los heridos y trasladarlos al casco urbano del municipio de El Encanto. A las pocas horas se hicieron presentes las primeras brigadas de auxilio enviadas por el gobierno departamental y nacional.
15. 6 de febrero un cese temporal de las negociaciones por 30 días.

8. El 10 de febrero de 2004, en la zona rural del municipio Cristales se presentaron fuertes combates entre miembros del EAA contra fuerzas del FACIRA y el MAR, la confrontación ocasionó muertes inmediatas y en vista que pasadas más de 24 horas, el Comando Militar del Ejército de Atlanta inicio una operación aérea para atacar a los miembros de las distintas organizaciones armadas no estatales. Se realizó un “bombardeo de zona” que resulto, en el cese de los combates, a raíz del bombardeo de la FAA, una pequeña represa resultó seriamente afectada. Aunque gracias a la reacción inmediata de la fuerza pública se logró desalojar a los habitantes de los sectores circunvecinos de la represa

9. Vencidos los 30 días de la suspensión de las negociaciones de paz, el gobierno con el ánimo de reactivar el proceso de paz y de ofrecer una respuesta a los hechos, presentó el 6 de marzo de 2004 a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley con trámite de urgencia, ofreciendo un paquete de medidas en torno a los temas de verdad, justicia y reparación. Algunos contenidos de la ley, se presentan a continuación:

10. Se crea una Comisión de Verdad que busca “esclarecer las graves violaciones de derechos humanos, se crea un programa de reparaciones administrativas para “las víctimas de graves violaciones de derechos humanos perpetradas en el territorio Estado de Atlanta desde el 1º de agosto de 1992 por miembros de la fuerza pública y grupos armados no estatales. El programa de reparaciones administrativas contará con medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, indemnización y garantías de no repetición”.

11. en el 2004 la Fiscalía de Atlanta investigó los hechos ocurridos entre el 31 de enero y el 10 de febrero de ese año, que arrojaron los siguientes resultados: Varias órdenes de capturas contra miembros de EAA, así como también ordenes de captura contra jefes del FACIRA y de igual

forma contra miembros de la Jefatura del MAR, no obstante se iniciaron investigaciones por las desapariciones forzadas ocurridas por los ataques.

12. se instala formalmente la Comisión de Verdad de Atlanta y el Programa administrativo de reparación, las negociaciones de paz se reactivaron el 1° de mayo de 2004.

13. Una de las primeras investigaciones adelantadas por la Comisión de Verdad fue en relación con los hechos ocurridos entre el 31 de enero y el 10 de febrero de 2004. El 24 de junio en una rueda de prensa en la estableció las siguientes responsabilidades institucionales: por los hechos del 31 de enero de 2004 al EAA; por los hechos del 3 de febrero a las FACIRA; por los hechos del 4 de febrero al MAR y por los hechos del 11 de febrero al EAA, a las FACIRA y al MAR.

14. El 30 de junio de 2005, un juzgado especializado condenó a Inocencio Guagá por lo delitos de rebelión, sedición y homicidio, así como a 5 miembros de las FACIRA y 2 del MAR que participaron en los combates del 10 de febrero de 2004

15. El programa de reparaciones administrativas, hizo dos eventos durante el segundo semestre del 2005 para las víctimas sobrevivientes y para los familiares de las víctimas asesinadas del 31 de enero, 3, 4 y 11 de febrero de 2004: el 31 de agosto, se inició el programa de rehabilitación física y mental y el 10 de diciembre, en conmemoración del día internacional de los derechos humanos, entregó viviendas y becas educativas. Además, el 31 de enero de 2006 en Milpiés, se descubrió un monumento en memoria de las víctimas, dos años después de ocurridos los hechos y entregó a los familiares de las víctimas muertas unos bonos por US \$ 10.000 cada uno, para ser pagaderos dentro de los diez años siguientes, de los cuales cada año se hará efectiva la suma de US \$ 1.000.

16. El 31 de octubre de 2010, las señoras Judith Xiyé y Raquel Kewá, en representación de Adán Yemayá y 103 personas más debidamente identificadas, presentaron una petición ante la CIDH, además por los hechos ocurridos el 31 de enero de 2004, los peticionarios piden que se declare la responsabilidad de Atlanta por genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra, además se pide que se declare la responsabilidad del Estado por la violación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949.

17. El 30 de abril de 2011, la CIDH declaró admisible el caso en relación con las presuntas violaciones a los artículos de la Convención Americana, pero lo declaró inadmisibile en relación con los cargos de genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y violación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949.

18. El 10 de diciembre de 2011, se celebra la audiencia sobre el fondo, el 10 de agosto de 2012, la CIDH sometió el caso ante la Corte.

19. El 11 de diciembre de 2012, el Estado de Atlanta remite a la Corte su escrito de contestación. Presenta una excepción preliminar de incompetencia de la Corte Interamericana.

20. En relación con el fondo del asunto, el Estado de Atlanta se opone a que se le declare responsable por la violación de los artículo 17 y 21 como lo piden los representantes de las víctimas en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, el 20 de enero de 2013 la Corte convocó a una audiencia pública a celebrarse el 19 de febrero de 2013.

OBJETO Y APERSONAMIENTO

La República de Atlanta (en adelante el Estado o Atlanta) comparece ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte, Tribunal o CrIDH) mediante sus agentes designados, y bajo el amparo de los artículos 41, 42 y 45 del reglamento de la misma, sustenta sus argumentos preliminares y de fondo en la causa que se le adelanta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión o CIDH) y los Representantes de las presuntas víctimas (en adelante los representantes o peticionarios) por la supuesta violación a los artículos 4, 5, 8, 11, 13.1, 16, 17, 19, 21, 23, 25 y 63.1 en conexidad con el artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante Convención o CADH), en supuesto perjuicio del señor Adán Yemayá y otras 103 personas. La finalidad perseguida por el Estado, es que se le exonere de la supuesta responsabilidad internacional alegada por la CIDH y sostenida por los representantes.

COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD

Esta Corte es competente para conocer del presente caso, por cuanto la República de Atlanta ratificó la CADH en 1995 y, aceptó la competencia contenciosa de esta Honorable Corte el 1 de febrero de 1996. Por otra parte, los hechos controvertidos del presente caso ocurrieron con posterioridad a la entrada en vigor de la CADH y dentro del territorio del Estado. Seguidamente, de conformidad con el artículo 61 de la CADH, la CIDH sometió el presente caso a consideración de esta Corte mediante el informe de que trata el artículo 50 de la CADH. Dado lo anterior se puede apreciar que se cumplen con todos los criterios de competencia requeridos a saber en razón de tiempo, lugar, persona y materia.

EXCEPCION PRELIMINAR

Como bien es del conocimiento de este Tribunal, las excepciones preliminares hacen parte de los actos procesales que puede ejercitar un Estado en medio de un proceso en su contra, para así poder ejercer el derecho de contradicción libremente y bajo las reglas del debido proceso legal¹. Dichas excepciones buscan objetar la admisibilidad del informe sometido por la CIDH o la competencia de este Honorable Tribunal para conocer de un determinado caso o asunto referido al mismo, con la finalidad de obtener una decisión que prevenga o impida el análisis sobre el fondo del aspecto cuestionado o de todo el caso². Atendiendo a ello y sin perjuicio de lo anterior, el Estado renuncia a la excepción preliminar de la falta de agotamientos de recursos internos presentada oportunamente ante la CIDH y reiterada ante este Tribunal. Sin embargo, mantenemos la excepción preliminar de la falta de *Ratione Materiae* de este Tribunal para declarar responsabilidad internacional al Estado por el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y por la violación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949; cuestión que fue alegada y solicitada por los representantes de las presuntas víctimas.

Es de recordarse que en el caso las *Palmeras vs Colombia*, la CIDH acusó al Estado Colombiano de haber quebrantado el artículo 3 común a los convenios de ginebra y pidió a la CrIDH declarar responsabilidad al Estado por esta normatividad. En dicha oportunidad la CrIDH explicó que, la CADH al prever su existencia lo hizo para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones del CADH (artículo 62.3) y otros instrumentos aplicables del sistema interamericano que le otorguen competencia a través del sistema de peticiones que regula

1 CrIDH, Caso Grande Vs. Argentina. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 231.

2 CrIDH, Caso Luiciana Ríos y Otros vs. Venezuela, Resolución de la CrIDH del 18 de Octubre de 2007; Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos de México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184.

la CADH³; motivo por el cual esta Corte llegó a la conclusión que la CADH solo le ha atribuido competencia a la CrIDH para determinar la compatibilidad de los actos o de las normas de los Estados con la propia CADH, y no con los Convenios de Ginebra de 1949⁴. Seguidamente, en casos como el de la *Masacre de Mapiripan vs Colombia* y *Bámaca Velásquez vs Guatemala* la CrIDH determinó que la atribución de responsabilidad internacional bajo las normas de DIH no puede ser declarada, como tal, por ella, sin desmeritar que dichas normas puedan ser útiles para la interpretación de la CADH⁵; como por ejemplo, en las situaciones de combate en las cuales las normas de DIH operan como fuentes de interpretación autorizadas al resolver denuncias que aleguen la violación de la CADH⁶.

Así las cosas, los representantes con su solicitud buscan que este Tribunal se abrogue competencias que no le atañen y, que en sí, son de competencia de la respetada Corte Penal Internacional de conformidad con el Estatuto de Roma de 1998; pero ello bajo el entendido que los juicios que emanen de la Corte Penal Internacional recaen sobre individuos que cometan los delitos que su estatuto contempla y no sobre Estados.

Por lo expuesto, esta representación solicita a este honorable Tribunal que acepte esta excepción preliminar y que al decidir sobre el presente caso se abstenga de declarar responsabilidad internacional al Estado por el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y por la violación del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949.

3 CrIDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr.35.

4 CrIDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párrs. 32 y 33.

5 CrIDH, Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrs. 208 a 209.

6 CIDH, Informe N° 55/97 Caso 11.137 Juan Carlos Abella Vs. Argentina de 18 de noviembre de 1997.

ANÁLISIS DEL FONDO DEL CASO

No violación de los artículos 4, 5, 11 y 19 de la CADH en relación con su artículo 1.1

En el presente caso los peticionarios alegan que el Estado es responsable por los hechos ocurridos el 31 de enero de 2004 en el caserío Milpiés, por cuanto dada su aquiescencia en dicho lugar murieron 33 personas, hubo 47 heridos, entre los cuales había afrodescendientes, indígenas, niños, hombres, mujeres e incluso violación sexual frente a una menor y una mujer adulta; todas estas conductas realizadas por la incursión armada en dicho terreno por parte de miembros de EAA. Igualmente alegan que, el Estado es responsable por ausencia de garantías de protección y prevención en la muerte de 5 personas que fueron ocasionadas por miembros del FACIRA el día 3 de febrero de 2004 en el municipio de solaris.

Quiere esta representación señalar que lo alegado por los representantes no constituye en sí, causal de responsabilidad estatal, toda vez que el Estado no ha dado su apoyo para que los miembros del EAA y del FACIRA llevaran a cabo estos actos. Si bien es cierto esta Corte ha sido del criterio que el Estado puede ser responsable por actos de terceros que han contado con su aquiescencia, en casos como el de las *Masacres de la Rochela y Mapiripan, ambos contra Colombia*, no es menos cierto que en el presente caso no se cumplen con las particularidades necesarias para que el Estado responda por estos actos de terceros. Nótese que en los casos mencionados, esta CrIDH constató que el nacimiento de las fuerzas paramilitares en Colombia, tuvo su origen en el decreto 3398 de 1965 y la ley 46 de 1968, normas estas expedidas por el gobierno en turno dada la turbación del orden público y el estado de sitio a nivel nacional, *generando con ello el mismo Estado una situación de riesgo conocida y latente*. Consecuentemente, en dichos casos esta Corte atendiendo al acervo probatorio pudo determinar

que miembros de la fuerza pública colaboraban directamente con los grupos de autodefensa para llevar a cabo la consumación de los hechos, cuestión que era causa atribuible al Estado. A *contrario sensu* en el caso que nos ocupa, la creación de las EAA no obedece a patrones de creación Estatal, ya que estas fueron creación de particulares para defenderse de los ataques del FACIRA y del MAR; estos últimos quienes a su vez, también se crearon a iniciativa de particulares que fueron asociándose gradualmente. En otras palabras, estos grupos se crean sin contar con la aquiescencia del Estado para su organización y funcionamiento, cuestión que desmerita la vinculación de las actividades de estos grupos con la aquiescencia Estatal. Aunado a lo anterior debe recordarse que, este tribunal en el caso de la *Masacre de Pueblo Bello vs Colombia* fue del criterio que, un Estado no puede ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre particulares dentro de su jurisdicción; toda vez que el carácter *erga omnes* de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran *condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo*. Es decir, aunque un acto, omisión o hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no es *automáticamente* atribuible al Estado, pues debe atenderse a las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas obligaciones de garantía⁷.

Lo anterior permite concluir que si bien es cierto el Estado conoce que dentro de sus jurisdicción existen grupos al margen de la ley, no es menos cierto que precisar el día, hora, lugar y

7 CrIDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Párr. 123.

modalidad en el cual estos grupos van a atacar es una carga que le es imposible al Estado precisar, ya que como tal, el Estado no es omnisciente ni omnipresente. Consecutivamente, al no poder ser precisado por el Estado un evento de esta naturaleza, es obvio que el conocimiento de la situación de riesgo real e inmediato se disminuye, impidiendo así, la certeza sobre la realidad en un futuro ataque determinado o no.

El Estado no desconoce que el derecho a la vida e integridad personal consagrados en los artículos 4 y 5 de la CADH, son derechos fundamentales de cuya salvaguarda depende la realización de los demás derechos, y que en virtud de ellos, estamos en la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones a estos derechos inalienables⁸; como en el *cas de´ spece* hemos tomado desde hace varios años las medidas para desarticular y evitar los ataques de estos grupos de delincuencia y medidas para la atención inmediata de los derechos en amenaza o peligro.

Nótese que en cuanto supimos del ataque del 31 de enero de 2004, el Estado tanto a nivel departamental como nacional, no dudo en enviar inmediatamente las brigadas de auxilio para socorrer a las presuntas víctimas y mitigar los efectos de la agresión, demostrándose con ello que el Estado no fue indiferente ante lo ocurrido y que desplegó diligentemente su aparato gubernamental para garantizar los derechos de los heridos.

En relación con el artículo 5 de la CADH y refiriéndonos al caso de la menor de edad y de la mujer adulta violadas sexualmente por miembros del EAA el día 31 de enero de 2004, el Estado conoce que en casos como el del *Penal Miguel Castro Castro vs Perú*, *Rosendo Cantú vs México* y el TEDH en casos como el *Aydin vs Turquía*, se ha considerado que la violación sexual es una experiencia traumática cuyas consecuencias se manifiestan de manera física y

⁸CrIDH cfr. caso de la masacre de pueblo bello vs. Colombia sentencia de 31 de enero de 2006 en el, párr. 120.

psicológica dado que deja a la víctima humillada física y emocionalmente, situación difícilmente superable por el paso del tiempo⁹. De ello se desprende que es inherente a la violación sexual el sufrimiento severo de la víctima, aun cuando no exista evidencia de lesiones o enfermedades físicas.

En efecto, la violación sexual también causa severos daños y secuelas psicológicas, e inclusive, sociales¹⁰, razón por la cual el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia en el caso de *Anto Furudzija*¹¹, y el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura en *su Observación General No. 2*, han llegado a la conclusión que la violación sexual también puede constituir una *forma de tortura*¹², y que seguidamente tras el acto, se logra atentar contra el derecho a la honra y dignidad de la víctima¹³ ya que dentro de este derecho se incluye la protección de la vida privada y con este, el ámbito de la vida sexual, tal y como señaló este Tribunal en el caso de las *Masacres de Río Negro Vs. Guatemala*¹⁴. No obstante lo anterior, cabe resaltar que estos hechos jamás fueron denunciados a nuestras autoridades por parte de las presuntas víctimas, ni estas se allegaron a nuestras autoridades para la práctica de los exámenes correspondientes.

Sobre este punto es menester traer a colación el caso *Rosendo Cantú vs México*, en el cual este Tribunal determinó que, en los casos de violaciones sexuales el Estado debe prestar toda la

9 CrIDH Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 311; TEDH. Caso de Aydın v. Turkey (No. 57/1996/676/866), Sentencia de 25 de septiembre de 1997, párr. 83.

10 CrIDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 124.

11 ICTY, Prosecutor v. Anto Furudzija, sentencia del 10 de diciembre de 1998, párr. 163. Dicha decisión judicial fue confirmada en la Cámara de Apelaciones del ICTY por la sentencia del 21 de julio de 2000.

12 CrIDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr. párr. 118.

13 CrIDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 193, y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 162.

14 CrIDH. Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 133; TEDH, Caso Dudgeon vs. Reino Unido (No. 7525/76), Sentencia de 22 de octubre de 1981, párr. 41; TEDH, Caso X and Y vs. Holanda (No. 8978/80) Sentencia de 26 de marzo de 1985, párr. 22.

ayuda necesaria a la víctima para su rehabilitación y para lograr obtener las muestras necesarias para la identificación de los autores del acto y su posterior enjuiciamiento, siempre y cuando *medie el consentimiento de la víctima* para las diligencias pertinentes. Asimismo, este Tribunal en el mismo caso, al igual que la CIDH en el caso de *Ana, Beatriz y Cecilia Gonzales Pérez vs México*¹⁵ y el TEDH en el caso *M.C vs Bulgaria* han puesto énfasis en el empleo del Protocolo de Estambul en el tratamiento de casos donde se alegan violaciones sexuales. En efecto, el Protocolo de Estambul brinda métodos eficaces para la investigación de este tipo de actos, y establece que es aconsejable realizar una revisión de síntomas, llevar a cabo la exploración tras la agresión sexual y el seguimiento, fases estas que permiten arrojar luz sobre lo acontecido y que pueden permitir la identificación de los culpables, sin embargo, todos estos exámenes tienen que ser con el consentimiento libre previo e informado de la víctima; cuestión que en el presente caso no se ha podido conseguir por el desinterés de las presuntas víctimas para aclarar los hechos y lograr la reparación integral correspondiente.

Por último queremos referirnos al alegato de los representantes en el cual señalan que somos responsables de las muertes de 13 civiles en el bombardeo del 11 de febrero de 2004. Sobre este punto queremos aclarar que, en primer lugar en la zona bombardeada no hubo civiles, ya que las personas fallecidas eran miembros del FACIRA, MAR y EAA; segundo que el Estado no ha utilizado bombas incendiarias; pues es de conocimiento público que los miembros del MAR están fuertemente armados gracias a la exportación ilegal del coltán, y son estos los que acostumbran a emplear bombas en sus ataques contra bancos, empresas y entidades estatales: ejemplo de ello fue el ataque que sufrieron nuestras fuerzas armadas el día 4 de febrero de 2004

15 CIDH, Informe No. 53/01, caso 11.565 de Ana, Beatriz y Cecilia Gonzales Pérez vs México, 4 de abril de 2001, Párr. 48.

en el Comando de la Fuerza de Tarea Cóndores, en la que murieron 20 militares y resultaron heridos de consideración otros 14.

El Estado sabe perfectamente que las bombas incendiarias se encuentran prohibidas a partir del Protocolo III a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1980, y por ello, tiene penalizada su utilización de conformidad con el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1977.

Seguidamente queremos recordar a este magno Tribunal que, los cuerpos de seguridad estatales pueden recurrir al empleo de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida o a la población y cuando resulten ineficaces medidas menos extremas¹⁶. Seguidamente no puede dejarse por alto tal y como se señaló en el caso *Bámaca Velásquez vs Guatemala* que, el Estado tiene la facultad e incluso la obligación de garantizar la seguridad y mantener el orden público, utilizando la fuerza si es necesario. En el presente caso está dado que los combates entre FACIRA y MAR vs EAA se estaban intensificando con el pasar de las horas, y en vista de ello para poder sofocar el enfrentamiento y evitar daños a civiles fue necesaria la táctica utilizada; máxime cuando la prioridad en estos casos es defender a los civiles en virtud del principio de distinción y que medidas más leves hubiesen resultado ineficaces; aunado a lo anterior es de resaltar que los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales no prohíben los bombardeos de zona siempre y cuando se respete la normatividad del DIH y los principios que de ella emana.

No negamos que si utilizamos municiones de alto calibre, pero permitidas por el DIH. Además, hoy en día no existe tratado internacional que le impida al Estado defender su soberanía ni mucho menos a su población. En efecto, no negamos que el DIH busca limitar medios y métodos

16 O.N.U., Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, La Habana, Cuba, 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990, Principios 4 y 9.

de guerra en los conflictos armados, sean estos internacionales o no internacionales, para proteger a la población civil y sus bienes, y a su vez sabemos que, tanto el DIH como el DIDH toman como punto de partida su preocupación común de salvaguardar la dignidad humana, que forma la base de sus estándares mínimos de humanidad tal y como señaló Tribunal Penal Internacional para la Ex-Yugoslavia en el *caso Mucic et alii*¹⁷.

Por los argumentos expuestos solicitamos a este Tribunal desmerite los argumentos de los representantes y, en consecuencia, declare que el Estado no es responsable por la violación al derecho a la vida, integridad personal, honra y dignidad y derechos del niño.

No violación de los artículos 17, 19 y 21 en conexidad con el artículo 1.1 de la CADH

En el presente caso las víctimas no alegaron ante la CIDH la violación del artículo 17 y 21 de la CADH. Sin embargo, atendiendo a que esta Corte en casos como *López Álvarez vs Honduras* y *Chitay Nech y otros vs Guatemala* ha sido del criterio que las presuntas víctimas o sus representantes pueden invocar derechos distintos de los comprendidos en el informe de la CIDH, así como de otros instrumentos que otorguen competencia a la Corte para declarar violaciones respecto de los mismos hechos objeto del informe¹⁸; no presentaremos objeción a ello.

Del texto de la CADH y según este Tribunal en casos como el de la *Familia Barrios vs Venezuela* y *Abrill Alosilla vs Perú*, el artículo 21 de la CADH reconoce el derecho a la propiedad privada. A este respecto establece: a) que “toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes”; b) que tales uso y goce se pueden subordinar, por mandato de una ley, al “interés social”; c) que se puede privar a una persona de sus bienes por razones de “utilidad pública o de

17 ICTY, Prosecutor v. Mucic et alii, sentencia del 20 de febrero de 2001.

18 CrIDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141. Párr. 82.

interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”; y d) que dicha privación se hará mediante el pago de una justa indemnización.

En referencia a este derecho esta Corte ha desarrollado una amplia definición en su jurisprudencia que abarca, entre otras cosas, el uso y goce de los bienes, definidos como objetos materiales que pueden ser adquiridos, así como todo derecho que pueda formar parte de la riqueza personal de una persona. Este concepto incluye tanto los bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, elementos y cualesquiera otros no materiales objetos de valor¹⁹.

En el presente caso los representantes aseguran que el Estado es responsable por el robo de bienes por una suma *aproximada* al millón de dólares y el incendio de ocho casas de habitación, por hechos cometidos por miembros del FACIRA el día 3 de febrero de 2012; así como por la pérdida de los bienes por el desplome de la represa el 11 de febrero de 2004.

Sobre el primer hecho queremos resaltar que el robo fue cometido por miembros del FACIRA. Es decir, es una cuestión atribuible directamente a particulares y no al Estado ya que no prestó su colaboración para ello; aunado a ello y como ya quedo explicado, estos fueron hechos que se dieron repentinamente y de los cuales no existía una situación de riesgo creada dado los avances de nuestras negociaciones de paz durante el año 2003. Asimismo debe tenerse en cuenta que, si bien los representantes han enunciado un robo de bienes por un valor *aproximado* de un millón de dólares y el incendio de ocho casas de habitación, es menester que la suma sea precisamente cuantificada y no librada al azar, ya que como tal, el Estado solo puede investigar a partir de una noticia criminis completa y no con elementos confusos.

En cuanto al segundo hecho, el Estado reconoce que los enfrentamientos del día 11 de febrero de 2004 pudieron haber debilitado la *pequeña represa*, la cual en últimas, se desbordó y anegó 10

19 CrIDH, Caso Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54.

hectáreas de tierra, lo cual en este evento si es imputable al Estado, razón por la cual pedimos disculpas a las presuntas víctimas de estos hechos. Sin embargo queremos resaltar que si bien este hecho es generador de responsabilidad estatal, no es de menos que el Estado atendiendo a la jurisprudencia de este Tribunal en casos como el de *Díaz Peña vs Venezuela*, ha cumplido con su deber de reparar y en consecuencia ese hecho generador de responsabilidad desaparece²⁰. Nótese que el Estado a través del programa de reparaciones administrativas llevó a cabo jornadas para otorgar una reparación integral a las víctimas de los hechos del 31 de enero, 3, 4 y 11 de febrero de 2004. En dichas jornadas se reparó integralmente a las víctimas de estos hechos con medidas de rehabilitación, indemnización, cesación y garantías de no repetición, así como de reparación simbólica. En efecto, el Estado entregó *para todos*: viviendas, becas educativas, inició el programa de rehabilitación física y mental, se descubrió un monumento en memoria de las víctimas, y entregó bonos por la suma de US \$ 10.000 a cada uno.

Lo expuesto demuestra que el Estado cumplió con su deber de reparar, atendiendo a la situación de vulnerabilidad de las víctimas en aras de restituirles su derecho a la propiedad privada y otros como la vida e integridad personal.

En relación al artículo 17 de la CADH, no es cierto que el Estado haya desprotegido a las familias de los hechos del presente caso. Nótese que ocurridos los hechos del 31 de enero de 2004 a las pocas horas se hicieron presentes las primeras brigadas de auxilio enviadas por el gobierno departamental y nacional con el fin de socorrer a cada familia y persona necesitada; asimismo, cuando por razón de los enfrentamientos del 11 de febrero de 2004 se averió la represa y produjo el inundamiento, la fuerza pública intervino diligentemente y logró desalojar a cada familia y persona de los sectores circunvecinos de la represa, antes de que esta se desplomara y liberará sus

20 CrIDH, Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244.

aguas. Por otra parte, para no dejar a estas familias desamparadas y con un futuro incierto, tomamos la iniciativa de darles un techo digno a cada una de ellas junto con indemnización y becas educativas; ya que sabemos perfectamente que la educación genera cambios positivos, ella constituye un factor de desarrollo humano crucial para adquirir las herramientas necesarias para el desenvolvimiento en el medio cultural en el que se habita; se concreta en un proceso de formación personal, social y cultural de carácter permanente, que busca el acceso al conocimiento, ciencia y técnica.

Lo anterior adquiere mayor fortaleza, dado que atendiendo a la jurisprudencia de este Tribunal en el caso *Atala Riffo y Niñas Vs. Chile*, el derecho de protección a la familia reconocido en el artículo 17 de la CADH conlleva, entre otras obligaciones, a favorecer, de la manera más amplia, el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar²¹. Seguidamente, hemos evitado la separación de niños de sus familias porque ello puede constituir, bajo ciertas condiciones, una violación del citado derecho de protección a la familia. En ese sentido esta Corte ha establecido que el niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas²².

Por los argumentos expuestos el Estado solicita se a este Magno Tribunal desmerite los argumentos de los representantes y, en consecuencia, declare que el Estado no es responsable por la violación al derecho a la propiedad privada, protección a la familia en conexidad con el artículo 19 y 1.1 de la CADH.

21 CrIDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 66; CrIDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239 párr. 169.

22 CrIDH, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 157; CrIDH, Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 188.

No violación de los artículos 13.1, 16 y 23 de la CADH en conexidad con su artículo 1.1

En el presente caso los representantes afirman que el Estado ha quebrantado los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y derechos políticos en ocasión a la falta de participación política a los militantes del movimiento político Indígenas y Campesinos por la Paz y, por la posible desaparición forzada de Tancredo Yubal.

Sobre el primero de estos puntos, el Estado lamenta profundamente y se solidariza con sus compatriotas del movimiento político indígenas y campesinos por la paz. No somos desconocedores de su historia y de lo que han vivido; especialmente, en la época de 1991 en la cual se inició el primer proceso de paz en la Atlanta. Proceso este que tuvo serias dificultades, como fue el caso de opositores políticos simpatizantes de los militares que derrocaron el gobierno en 1979, quienes persiguieron sistemática y generalizadamente a los miembros del movimiento político llamado “Indígenas y Campesinos por la Paz” trayendo con ellos la muerte de más de 100 miembros de este movimiento durante 1991. Pese a lo anterior, estos hechos aquí recién descritos hasta ahora, no entran en la esfera de la competencia de este Tribunal por cuanto se realizaron antes de la entrada en vigor de la CADH y de la competencia del mismo²³.

Ahora bien, atendiendo a la nueva realidad de la Atlanta, no es posible decir que no hemos dado las garantías para que este movimiento se exprese, se asocie y participe política y activamente en nuestro Estado.

Sabe perfectamente el Estado que el artículo 16.1 de la Convención establece que, quienes están bajo la jurisdicción del Estado tienen el derecho y la libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del referido derecho. Además, gozan del derecho y la libertad de reunirse con la finalidad de buscar

23 CrIDH, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30.

la realización común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad²⁴. Al igual que estas obligaciones negativas de la libertad de asociación, también se derivan obligaciones positivas como la de prevenir los atentados contra la misma, proteger a quienes la ejercen e investigar las violaciones de dicha libertad. Estas obligaciones positivas deben adoptarse, incluso en la esfera de relaciones entre particulares, si el caso así lo amerita²⁵.

En el presente caso no se le ha impedido a ningún campesino o indígena ser miembro de su movimiento político. En especial, hemos dado las condiciones dignas para poder ejercer el derecho a la libertad de asociación evitando todo tipo de atentados en la actualidad contra cualquier miembro de cualquier asociación. Ello por cuanto entendemos que de conformidad con este Tribunal en el caso *Cantoral Huamani y Garcia Santa Cruz* es menester que el Estado garantice a las personas ejercer libremente su libertad sindical sin temor de que serán sujetos a violencia alguna, ya que de lo contrario, se puede disminuir la capacidad de las agrupaciones de organizarse para la protección de sus intereses²⁶.

En cuanto al derecho a la libertad de expresión, al tenor de esta Corte en casos como *Vélez Restrepo y familiares vs Colombia* y *Uzcategui y otros vs Venezuela* entendemos que, este derecho permite a su titular no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Ello por cuanto la libertad de expresión tiene una dimensión individual y una dimensión social; por un lado requiere que, nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de

24 CrIDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. párr. 156.

25 CrIDH, Caso Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121. Párr. 76.

26CrIDH, Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. Parr. 146.

manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno²⁷.

Ahora bien en materia de procesos de paz y campañas electorales, la libertad de pensamiento y de expresión en sus dos dimensiones constituye un bastión fundamental, debido a que se transforma en una herramienta esencial para la formación de la opinión pública, fortalece la contienda política entre los distintos candidatos y partidos que participan en los comicios y se transforma en un auténtico instrumento de análisis de las plataformas políticas planteadas por los distintos candidatos, lo cual permite una mayor transparencia y fiscalización de las futuras autoridades y de su gestión. Sobre este punto, el TEDH en casos como el *Partido Comunista Unido de Turquía y otro vs Turquía e Incal vs Turquía* ha expresado que la libertad de expresión, es particularmente importante para los partidos políticos y procesos de paz. Por lo cual, las interferencias a la libertad de expresión de un movimiento político deben ser cuidadosamente examinadas a fin de evitar lesiones al derecho²⁸; ya que en efecto, existe una fuerte conexión entre libertad de expresión y derechos políticos que se fortalece mutuamente entre sí y que permite el cimiento de cualquier sistema democrático.

No entiende el Estado el motivo por el cual los representantes señalan violación a estos derechos, cuando lo que estamos buscando en estos diálogos de paz es un proceso abierto, libre, informado, sometido a la opinión pública y liderado por los principios democráticos para así lograr la inclusión real de los que se sientan afectados y para que sean escuchados en pro de la democracia en Atlanta.

27 CrIDH, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248.

28 TEDH. Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June, 1998, Reports 1998-IV, para. 46.

En relación con la posible desaparición forzada del señor Tancredo Yubal, es menester tener en cuenta que hoy en día no hay patrones sistemáticos ni generalizados ni de política estatal para silenciar a los miembros del movimiento político indígenas y campesinos por la paz. En efecto, en Atlanta esos actos sistémicos se erradicaron con la entrada en vigor de la nueva Constitución Política de Atlanta y gracias a la labor de la fuerza pública. Nótese que en casos como el de *Chitay Nech y otros y Masacre de Río Negro, ambos vs Guatemala*, se pudo comprobar un *modus operandis* en el fenómeno de las desapariciones forzadas que tuvieron lugar en dicho Estado; todas productos de un plan generalizado por miembros de la fuerza pública. Sin embargo, en el presente caso dicho patrón generalizado no existe y en consecuencia no puede atribuirse responsabilidad al Estado por la posible desaparición forzada del señor Tancredo Yubal en razón de su pertenencia al movimiento indígenas y campesinos por la paz.

Aunado a lo anterior, nótese que en estos momentos no existe denuncia alguna por la posible desaparición forzada del señor Yubal, ya que como consta en el marco fáctico del caso, las ONG'S de derechos humanos presentaron denuncias por las desapariciones forzadas del día 7 y 8 de febrero de 2004, pero no por la de 9 de febrero de 2004 presumiblemente correspondiente a la del señor Yubal (*ver hechos del caso, párrafos 20 y 30 punto ; Se resalta que esto no fue tenido en cuenta en las aclaraciones*).

Por lo expuesto solicitamos a este Tribunal desmerite los argumentos de los representantes y, en consecuencia, declare que el Estado no es responsable por la violación a los derechos enunciados en este punto.

No violación de los artículos 8 y 25 de la CADH en conexidad con su artículo 1.1

En el punto que nos concierne en esta oportunidad, el Estado observa que los representantes consideran que somos responsables por la violación a las garantías judiciales y a la protección judicial. Sin duda, alguna estos derechos también tienen vital importancia en la CADH.

Del artículo 8 de la CADH se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación. Ello busca garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad, entendido este como: *El derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer lo que ocurrió, las circunstancias de las violaciones, los responsables, así como los motivos y las estructuras que dieron lugar a las violaciones a los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario.* Derecho este que se deriva del deber de garantía a cargo de los Estados y del derecho de las personas a un recurso efectivo²⁹. Su finalidad es que los delitos más graves sean investigados utilizando todos los recursos disponibles y mediante varias líneas de investigación. Esto implica que tales delitos deben ser investigados y que el Estado es responsable por acción o por omisión si no hay una investigación seria acorde con la normatividad nacional e internacional.

En el presente caso el Estado mediante su órgano de persecución penal ha adelantado una investigación seria y encaminada a establecer la identidad de los autores de los hechos del presente caso. En efecto, se han utilizados sendas líneas de investigación para lograr nuestro cometido y se ha logrado la identificación de los autores de varios de los delitos cometidos, para su posterior juzgamiento y sanción. Asimismo se ha ordenado la práctica y valoración de pruebas

29 CIDH, caso de Ignacio Ellacuría y otros Vs. El Salvador, de 22 de diciembre de 1999.

y evidencias físicas que pueden ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos. Y así mismo, la recopilación de evidencias físicas debe ser efectuada por especialistas capacitados en el tipo de violencia que se está investigando, y preferiblemente debe ser del mismo sexo de la víctima³⁰.

Así, podrá esta Corte notar que durante el año 2004 la Fiscalía de Atlanta investigó arduamente los hechos ocurridos entre el 31 de enero y el 11 de febrero de ese año, y se arrojaron los siguientes resultados:

1. Por los hechos ocurridos el 31 de enero, se emitieron órdenes de captura contra Patricio Ragú, comandante general del EAA y contra 14 miembros más de esa organización. También se emitió otra orden de captura que se hizo efectiva contra Vicente Lalo, subcomandante de la Fuerza de Tarea Cóndores. Además continúan las investigaciones contra miembros de dicha Fuerza de Tarea que presuntamente pilotearon los helicópteros en que se movilizaron la mayoría de los miembros del EAA.
2. Por lo hechos ocurridos el 3 de febrero, se ordenó la captura de Inocencio Guagá, jefe del Comando Zandá del FACIRA. Todavía la fiscalía no ha podido individualizar a otros perpetradores y continúa con las investigaciones.
3. Por lo hechos ocurridos el 4 de febrero, se ordenó la captura de los miembros de la Jefatura del MAR, compuesta por Jeremías Caxú, Ezequiel Trak y Josué Hill. También se ordenó la captura que se hizo efectiva del profesor de matemáticas puras de la Universidad Nacional de Atlanta, Daniel Barber, como autor intelectual.
4. Por lo hechos ocurridos el 10 de febrero, se han capturado a 14 miembros del EAA, 5 de las FACIRA y 2 del MAR que participaron en los combates, pese a que la identificación

30 ONU, Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, Asamblea General, Res. 55/89, U.N. Doc. A./RES/55/89, 22 de febrero de 2001, Parr. 6. a.

de los autores responsables se dificulta porque todos los grupos armados no estatales utilizaron fusiles AK-47 con la misma munición.

Como bien podrá notar este tribunal la labor emprendida por la fiscalía de Atlanta ha sido fructífera y en ella no ha habido descanso. Ahora bien, no negamos que en el caso de las investigaciones por los casos de violación sexual presentados no se ha podido investigar, pero ello no es una causa imputable al Estado ya que en reiteradas oportunidades hemos requerido a las presuntas víctimas, y a la fecha están no han acudido ante nosotros para realizar las investigaciones correspondientes de conformidad con el Protocolo de Estambul para así lograr el enjuiciamiento de los culpables; recuérdese que según el Protocolo de Estambul frecuentemente utilizado por este Tribunal en casos de violaciones sexuales es menester contar con el consentimiento de la víctima, cuestión que en el presente caso no tenemos.

Con lo manifestado no queremos decir que en Atlanta, las investigaciones se realizan si las victimas aportan medios probatorios, ya que bien sabemos que una vez conocido un hecho debe adelantarse una investigación *ex officio* y sin dilaciones. Sin embargo en casos como el presente el Estado no puede coercitivamente tomar a la menor de edad y a la mujer adulta para realizar en ellas exámenes invasivos en su intimidad personal a menos que se quiera lograr la protección y restitución de un derecho en detrimento de otro.

Por otra parte los representantes alegan que en efecto existen fallas en las investigaciones ya que no se han podido abrir causas penales contra todos los culpables. No obstante queremos que esta Corte tenga presente que, en el caso *sub judice* no estamos en presencia de casos de sencilla resolución toda vez que hablamos de grupos armados al margen de la ley que poco respeto han demostrado por la democracia y la paz en la Atlanta. En efecto, el presente caso denota una amplia complejidad en virtud de que estos grupos cuentan con un número inmenso de militantes,

fuerte armamento, entre otros factores, y el Estado en aras de lograr la persecución de los miembros de estos grupos no puede exponer a la población a futuras represalias. Sin embargo, hemos demostrado como nuestra fiscalía sin duda alguna ha iniciado las diligencias pertinentes librando ordenes de captura y otros actos contra las cabecillas de estos grupos al margen de la ley, e incluso a personal militar del Estado, para así abarcar sendas líneas de investigación y evitar que los hechos queden en la impunidad³¹.

Por otra parte, este Tribunal debe tener en cuenta que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados, y en el caso que nos ocupa, esta ha sido asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa³², o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas, de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios³³. Aunado ello recuérdese que por ser esta una obligación de medios, no comporta hecho generador de responsabilidad si en el evento la investigación no arroja un resultado satisfactorio para las víctimas.

En relación con el artículo 25 de la CADH, en ningún momento hemos negado la interposición de acciones judiciales ni de recursos para lograr la protección de los derechos fundamentales de las presuntas víctimas, siempre hemos estado abiertos y ello se refleja en las actuaciones desplegadas por el Estado, para oír a cada uno de los afectados.

31 CrIDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4 párr. 176.

32CrIDH, Caso Ximenes López vs Brasil, sentencia 4 de julio de 2006, Serie C No 149. párr. 148.

33 CrIDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 144.

PETITORIO

Por los argumentos expuestos la republica de Atlanta solicita a este magno Tribunal que:

1. Estime la excepción preliminar de falta de *ratione materiae*.
2. Declare que el Estado no violó los artículos 4, 5, 11 y 19 de la CADH en conexidad con su artículo 1.1.
3. Declare que el Estado no violó los artículos 13.1, 16 y 23 de la CADH en conexidad con su artículo 1.1.
4. Declare que el Estado no violó los artículos 17, 19 y 21 de la CADH en conexidad con su artículo 1.1 y 2.
5. Declare que el Estado no violó los artículos 8 y 25 de la CADH en conexidad con su artículo 1.1 y 2

BIBLIOGRAFIA

Tratados del Sistema Universal

- Declaración universal de derechos humanos
- Pacto internacional de derechos civiles y políticos
- Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes
- Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes
- Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley

Instrumentos del Sistema Regional Americano

- Convención americana sobre derechos humanos
- Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura
- Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Tratados y Normas de Derecho Internacional Humanitario

- Convenios de ginebra de 1949
- Protocolo adicional II a los convenios de ginebra de 1977
- Protocolo III a la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de 1980

Tratados de Derecho Penal Internacional

- Estatuto de Roma de 1998

Casos e Informes de la CIDH

- CIDH, caso de Ignacio Ellacuría y otros Vs. El Salvador, de 22 de diciembre de 1999.
- CIDH, Informe N° 55/97 Caso 11.137 Juan Carlos Abella Vs. Argentina de 18 de noviembre de 1997.
- CIDH, Informe No. 53/01, caso 11.565 de Ana, Beatriz y Cecilia Gonzales Pérez vs México, 4 de abril de 2001, Párr. 48.

Casos y Opiniones Consultivas de la CrIDH

- CrIDH Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 311.
- CrIDH, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, párr. 157.
- CrIDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. Párr. 123.
- CrIDH, Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012. Serie C No. 244.
- CrIDH, Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 162.
- CrIDH, Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72. párr. 156.
- CrIDH, Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrs. 208 a 209.
- CrIDH, Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167. Parr. 146.
- CrIDH, Caso Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121. Párr. 76.
- CrIDH, Caso Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54.

- CrIDH, Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos de México, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184.
- CrIDH, Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr. 188.
- CrIDH, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30.
- CrIDH, Caso Grande Vs. Argentina. Excepciones Preliminares y Fondo. Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 231.
- CrIDH, Caso López Álvarez Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141. Párr. 82.
- CrIDH, Caso Luiciana Ríos y Otros vs. Venezuela, Resolución de la CrIDH del 18 de Octubre de 2007.
- CrIDH, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4 párr. 176.
- CrIDH, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248.
- CrIDH, Caso Ximenes López vs Brasil, sentencia 4 de julio de 2006, Serie C No 149. párr. 148.
- CrIDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 del 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 66.
- CrIDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006 Serie C No. 148, párr. 193.
- CrIDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párr. 124.
- CrIDH. Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Serie C No. 216, párr, párr. 118.
- CrIDH. Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, párr. 133.

- CrIDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párrs. 32 y 33.
- CrIDH. Caso Vélez Looor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr.35.
- CrIDH, Caso de la Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237.
- CrIDH, Caso Uzcátegui y otros Vs. Venezuela. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 249.
- CrIDH, Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. 248

Casos del TEDH

- TEDH, Caso Dudgeon vs. Reino Unido (No. 7525/76), Sentencia de 22 de octubre de 1981, párr. 41.
- TEDH, Caso X and Y vs. Holanda (No. 8978/80) Sentencia de 26 de marzo de 1985, párr. 22.
- TEDH. Case of Incal v. Turkey, judgment of 9 June, 1998, Reports 1998-IV, para. 46.
- TEDH. Caso de Aydin v. Turkey (No. 57/1996/676/866), Sentencia de 25 de septiembre de 1997, párr. 83.
- TEDH. Caso de M.C v. Bulgaria

Casos del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia

- ICTY, Prosecutor v. Anto Furudzija, sentencia del 10 de diciembre de 1998, párr. 163. Dicha decisión judicial fue confirmada en la Cámara de Apelaciones del ICTY por la sentencia del 21 de julio de 2000.
- ICTY, Prosecutor v. Mucic et allii, sentencia del 20 de febrero de 2001.

Observaciones Generales Órganos Convencionales

- Observación general No. 2 del Comité contra la Tortura